

ños, en qué medida asegura los derechos indiscutibles que les asignan la ética más básica y las constituciones democráticas. Muchos países de América Latina están distantes de pasar esa prueba.

Es hora de que el discurso consensual sobre la infancia se traslade a los hechos concretos. Se necesitan políticas públicas que realmente se hagan responsables por garantizar a todos los niños sus derechos indiscutibles de nutrición, salud, educación y desarrollo y que protejan el pilar de su felicidad y equilibrio, la familia. Es un momento de encrucijada. Las políticas pueden ir en una u otra dirección. Así, por ejemplo, hay quienes prometen una solución muy sencilla para los niños delincuentes: bajar la edad de imputabilidad para encarcelarlos. En ninguna sociedad avanzada del mundo se hace hoy eso. Todo el esfuerzo está volcado en su rehabilitación. Está demostrado que la mejor manera de reducir las tasas delincuenciales de niños y jóvenes se halla en invertir en fortalecer la familia, aumentar la educación y crear oportunidades de trabajo en el caso de los jóvenes (hoy se estima que la tasa de desocupación juvenil latinoamericana supera el 20%). A la acción pública a través de políticas agresivas pro infancia pobre debe sumarse una amplia movilización de la sociedad civil. Empresas privadas socialmente responsables que colaboren, el voluntariado, las organizaciones de todo orden pueden contribuir a una ejecución eficiente de las políticas públicas y adicionar recursos e iniciativas creativas. Son notables los logros de Unicef e instituciones como, entre otras, Cáritas, Fe y Alegría, Casa Alianza. Una alianza estratégica entre políticas públicas responsables y el capital social puede cambiar la situación.

Es urgente actuar. Las generaciones futuras juzgarán a América Latina más que nada por lo que ha hecho con su gente y sobre todo con sus niños. ¿Seguiremos en esta pasividad culpable frente a tanto sufrimiento infantil o pondremos en marcha la indignación que pregonan los textos bíblicos frente a las grandes injusticias éticas como ésta?

Más desigualdad, más corrupción

Según cálculos recientes del Banco Mundial, se gasta anualmente en corrupción en el planeta el 5% del Producto Bruto Mundial. Hay estimaciones que indican que la cifra latinoamericana es probablemente superior. Son recursos gigantescos extraídos de los países a través de prácticas que violan la ética y las leyes. Además del daño económico directo, causan todo orden de daños económicos indirectos y más allá de todo ello, gravísimos daños morales. Un reciente estudio de dos investigadores de Harvard, You Jong-Sung y Sanjeev Khagram (enero 2004),

echa por tierra muchas ideas convencionales sobre las causas de la corrupción y abre nuevos caminos para combatirla. Sobre la base de estudios econométricos en más de 100 países, los investigadores concluyen que hay una estrecha correlación entre desigualdad y corrupción. Cuanto más altos son los niveles de iniquidad mayor es la corrupción esperable. Establecen que se verifica una hipótesis generalizada en la literatura sobre corrupción que plantea que ésta es función de la motivación y la oportunidad. En las sociedades altamente polarizadas, los grupos de mayor poder cuentan con más oportunidades e incentivos para prácticas corruptas y mayores posibilidades de impunidad. Su acceso a la compra de influencias legales e ilegales es muy importante. En cambio, los grupos pobres y los medios alcanzan en esas sociedades limitados niveles de articulación política, dificultades de organización y son débiles para monitorear a los poderosos y defenderse de esas prácticas. La corrupción, a su vez, es uno de los canales principales multiplicadores de desigualdad. Afecta regresivamente la composición del gasto público, los niveles de inversión, el crecimiento económico y el funcionamiento democrático. Gupta (1998) estima que un incremento de un punto en el índice de corrupción hace aumentar el Coeficiente Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso en 5,4 puntos.

Se genera un círculo perverso. Cuanto más desigualdad, más corrupción. A su vez, esta última es una de las vías por las que la desigualdad trava el crecimiento y se reproduce, generando entonces ambientes propicios a la corrupción. Se refuerzan mutuamente. Se concluye que para actuar contra la corrupción estructuralmente se impone abordar a fondo el tema de la desigualdad —en lugar de verlos como dos cuestiones no conectadas— y marginarlo como sucede en el pensamiento económico convencional predominante en América Latina y Argentina.

La investigación hace otra constatación que refuta la ortodoxia circulante. Determina cuantitativamente que al contrario de lo que se piensa, los gobiernos pequeños —y no los grandes— son los que presentan mayores niveles de corrupción. Los pequeños implican sociedades donde hay bajos niveles de presión impositiva y escasas transferencias y subsidios. Los grandes representan con frecuencia tendencias inversas. Detrás del rol de los gobiernos y los niveles de corrupción hay un factor común, los grados de equidad. Una muestra de ello es el caso de los países escandinavos, que son líderes en inexistencia o bajos niveles de corrupción y cuentan con amplios y muy activos gobiernos. Tienen elevados niveles de igualdad. El monto promedio del 10% de más altos ingresos, corresponde a sólo 1,5 el del 50% de la población que menores importes percibe. Un estado activo es un componente central de este cuadro. El tema no es eliminar la actividad estatal para reducir la corrupción, sino mejorar su calidad para que fa-

vorezca una igualdad de oportunidades que a su vez creará condiciones contrarias a las que alienten la corrupción.

Las conclusiones de los investigadores son una importante referencia para entender mejor la realidad latinoamericana y argentina y para encontrar vías para solución.

La correlación aumento de la desigualdad, aumento de la corrupción ha tenido gran fuerza en el continente y en el país. En las últimas décadas se agudizó aún más la severa desigualdad latinoamericana lo cual convirtió a la región en la más inequitativa de todo el planeta. El 10% más rico es propietario del 48% del ingreso, el 10% más pobre sólo tiene el 1,6%. Peor aun que en África, donde las proporciones son 42,2 y 2,1. En la Argentina de los años noventa, las desigualdades crecieron casi brutalmente, por la acción de políticas que debilitaron las oportunidades productivas para los pobres y los estratos medios y generaron grandes concentraciones de ingresos en reducidos niveles sociales. Así, el porcentaje que representan los salarios en el ingreso nacional que era en 1950 el 51,9% y en 1993 el 29,4%, pasó a contraerse en 1998 al 24%, la clase media se redujo en un 20% en la década de 1990, la tasa de desempleo pasó del 9,6 % en 1993 a 17,4 % en 2001 y la población pobre más que se duplicó en dicha década. La distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre que era de 18 veces en 1993, pasó a 24 veces en 1998 y a 26 en 2.000 (en Corea es de 8 a 1).

Se creó en el país y en la región un ambiente propicio para la corrupción en términos de oportunidades e incentivos, de acuerdo con la tipificación de los investigadores de Harvard. Efectivamente, la corrupción creció significativamente en la Argentina según la percepción de amplísimos sectores de la opinión pública y también las innumerables denuncias. Asimismo, el argumento de que la reducción del Estado eliminaría las prácticas corruptas se mostró irreal. Un Estado débil, sin capacidad de regulación ni monitoreo, con una ecuación fiscal cada vez más regresiva, centrada en impuestos al consumo lesivo para las mayorías, generó espacios de gran envergadura para la corrupción. Ésta incidió a su vez sobre un empeoramiento en los niveles de iniquidad. Entre otros efectos, el aumento de la corrupción en lugar de atraer repele las inversiones externas estables.

La mejor identificación de algunos de los mecanismos incentivadores de la corrupción permite atisbar soluciones. Como bien señalan al concluir su trabajo Jong-Sung y Khagram: "Después de todo, la corrupción no es un destino." Hoy la ciudadanía de la región y del país percibe crecientemente que las grandes desigualdades además de injustas son letales para el avance de la economía y claman contra ellas exigiendo la democratización del acceso a oportunidades productivas. Percibe también que un Estado remodelado, eficiente, descentralizado,

transparente, participativo, articulado con la sociedad civil, tiene un gran rol por jugar. Así, mientras que en 1995, la mayoría de los ciudadanos eran partidarios de las privatizaciones, la última edición de la encuesta LatinBarómetro dice que los tiempos han cambiado. Así el 79% de los centroamericanos están insatisfechos con el traspaso a control privado de servicios públicos estatales de suministro de agua, electricidad y telefonía y sólo el 17% considera que las privatizaciones han sido beneficiosas. En la Argentina, una encuesta de Artemio López (febrero 2004) en la región metropolitana y partidos del conurbano indica que el 78,6% de la población no quiere reprivatizaciones y el 51,3% piensa que la mayoría de las empresas privatizadas no cumple sus contratos. Al mismo tiempo son abrumadores los pedidos para ampliar los servicios públicos de atención a la población en campos cruciales como la salud, la educación y otros similares.

El reclamo por más equidad, la articulación creciente de la sociedad para conseguirla, la percepción de que tiene como uno de sus componentes un Estado activo en la provisión de servicios básicos a la ciudadanía, el amplio apoyo que las políticas públicas orientadas en estas direcciones están teniendo en países como la Argentina y Brasil entre otros, pueden ayudar a terminar con los incentivos que favorecieron a la proliferación de la corrupción.

Uno de los efectos más perversos de los años noventa en el país fue la cuasi legitimación de las prácticas corruptas como "viveza criolla" y la estereotipación como "idiotas" de quienes se resistían a beneficiarse con ellas. Una gran luchadora anticorrupción, la jueza francesa Eva Joly, nos recuerda en su reciente obra *Impunidad* (2003) que en realidad es al revés. "Idiota" es en la acepción original ateniense del termino aquel que piensa solamente en sus intereses privados, mientras que "un hombre libre digno de ese nombre se consagra al bien común."

La marginalidad rural

Argentina tiene desafíos humanos inéditos. El 54,7% de la población es pobre. El 71,2% de los niños viven en la pobreza. El 50% de los niños de entre 6 meses y 2 años padecen anemia. Dos millones de niños no tienen cubiertas sus necesidades básicas. El 22% de los niños de entre 5 y 14 años de edad trabajan, según datos de Unicef. La desigualdad ascendió fuertemente en los años noventa.

Frente a este panorama, se requiere movilizar el inmenso potencial productivo del país, a través de fórmulas económicas imaginativas que democratizen las oportunidades. Hay una demanda social creciente por una economía plural, en la cual haya amplios espacios para las pequeñas y medianas empresas urbanas y ru-